

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL: San Salvador, a las nueve horas doce minutos del día cinco de marzo de dos mil veinte.

Por recibida la presente demanda suscrita por la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, en el Proceso de Ejecución Forzosa, promovido por la precitada Licenciada Rodríguez Ortiz, en contra del señor Osiris Luna Meza, en calidad de Director General de Centros Penales, juntamente con la siguiente documentación: 1) Copia certificada por notario de Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Judicial y Administrativo, otorgado por la licenciada Silvia Cristina Pérez Sánchez, en su calidad de Representante Legal del Instituto de Acceso a la Información Pública a favor de la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz y otros; 2) copia certificada por notario de Tarjeta de abogado de la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz; 3) copia certificada por notario de certificación de acuerdo ejecutivo número 104, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve; 4) copia certificada por notario de Tarjeta de Identificación Tributaria del Instituto de Acceso a la Información Pública, de Documento Único de Identidad y Tarjeta de Identificación Tributaria de la licenciada Silvia Cristina Pérez Sánchez; 5) copia certificada del libro de actas de juramentación de Funcionarios Públicos, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; 6) certificación de expediente de apelación de referencia NUE 297-A-2019 (AG), extendido por el Gerente de Garantía y Protección de Derechos del Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veinte de febrero del año en curso.-

Se hace constar que toda la documentación arriba relacionada ha sido presentada con sus respectivas copias de ley de conformidad al artículo 162 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Analizada que ha sido la demanda de ejecución forzosa y demás documentos presentados, el suscrito juez considera oportuno pronunciarse en el siguiente sentido:

El Art. 277 inc. 1º CPCM dispone que "si, presentada la demanda, el Juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo; carezca de competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente; evidencie falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se

rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión".

Así mismo el art. 575 del CPCM, en lo atinente al caso regula que "si la solicitud no se ajustara a los requisitos de fondo expresados en el artículo 574 del mismo cuerpo de ley, el juez rechazará in limine la ejecución mediante auto expresamente motivado" ...:

Razón por la cual el Órgano Judicial debe examinar y concluir al momento de recibir la demanda o solicitud si la pretensión puede ser juzgada. Luego de este examen de fundabilidad, la norma establece un análisis sobre: los presupuestos exigibles revisables de oficio; en esta categoría tenemos los presupuestos procesales, que son requisitos que deben estar completados para el nacimiento y desarrollo válido del proceso o de una relación procesal válida; consistente en las condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber del Juez de proveer sobre el mérito.

Es presupuesto básico para iniciar las actividades de ejecución forzosa, la existencia de un documento donde resulte determinada una obligación o un deber, cuyo cumplimiento puede exigirse de una persona (deudor o ejecutado), en favor de otra (acreedor o ejecutante); en esto consiste el título de ejecución.

Al respecto podemos señalar tres características fundamentales que posee todo título de ejecución:

a) En primer lugar, se trata de un documento que, por disposición expresa de la ley, se convierte precisamente en un título de ejecución, constituyendo por sí solo condición necesaria y suficiente para despacharla, de modo que se requiere sólo su regularidad formal.

b) En segundo lugar, el título de ejecución documenta una obligación o, más genéricamente, un deber cuyo cumplimiento se persigue y que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa, como muy bien lo hace ver la ejecutante.

c) Finalmente, el título de ejecución determina cuáles han de ser las partes legítimas en dicho procedimiento; bien quienes figuren en él como acreedor y deudor de la prestación. -

Para el caso de marras nos referiremos a la tercera de las características del Título de ejecución, es decir a las partes legitimadas para intervenir válidamente en el proceso de ejecución que nos ocupa. -

Al respecto el art. 560 inc. 1 CPCM, regula los límites de la actividad de ejecución, el cual textualmente dice: "El título de ejecución determina los límites de la actividad para darle cumplimiento, y por consiguiente son nulas las actuaciones de ejecución forzosa que se extiendan a cuestiones sustanciales que no hubieran sido decididas en el proceso correspondiente o que contradigan el contenido del título". Así mismo el art. 564 del mismo cuerpo legal establece quienes serán las partes en la ejecución y textualmente dice: **"será parte legítima en la ejecución forzosa el que la pide y también aquél contra el que se ordena, que habrá de ser el mismo que figure en el título como obligado al cumplimiento"** (las negritas son mías); en ese sentido podemos concluir que si en la resolución definitiva NUE 297-A-2019 (AG), identificada como [REDACTED] contra Dirección General de Centros Penales (DGCP), en la cual, en la decisión del caso se resuelve: específicamente en el literal b) ordenar a la Dirección General de Centros Penales, que a través de su titular, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, entregue al ciudadano [REDACTED] información pública concerniente al detalle de costos de los viajes listados en el numeral uno de la solicitud de información; en ese sentido, no puede este juzgador darle trámite a una demanda interpuesta en contra de una persona diferente a la que figura como parte obligada en el título de ejecución. -

Respecto a lo anterior en primer lugar es de aclarar que el proceso se caracteriza por ser una relación jurídica entre dos partes, por lo que debe apreciarse la legitimación procesal como consideración legal respecto de la pretensión incoada; es decir la relación de las partes con el objeto del litigio, en virtud del cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas personas figuren como tales en el proceso, esto es así, por cuanto la

calidad de parte es; esencialmente procesal, y viene dada por una determinada posición en el proceso. De allí, pues que la legitimación procesal pueda definirse como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz y que, significa un presupuesto para la decisión de fondo; es preciso pues que el juzgador previamente analice si las partes son las que deben de estar, esto es aquellos que son titulares de los derechos que se discuten.

Así mismo es importante traer a colación que para ser parte en un proceso, esto es para ocupar una de las posiciones antagónicas que en él existen, se necesita tener capacidad para ser parte, la cual puede ser definida como la aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal, esta no es más que la aplicación al campo procesal de la capacidad jurídica o capacidad de derecho, es decir, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones en general que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona y que es conocida también como capacidad de goce, pero este tipo de capacidad no es suficiente para poder actuar en un proceso, ya que para ello es necesario además tener capacidad procesal entendida como la aptitud para poder realizar con eficacia actos procesales de parte, es conocida también como "legitimatio ad processum". Es por ello que la jurisprudencia considera que "la capacidad de ser parte y la capacidad procesal no son más que la aplicación al campo procesal de la capacidad de ejercicio. Y es que, dentro de cada proceso, la ley determina los sujetos que habrán de intervenir en el mismo en atención a la relación que guardan con su objeto, es decir, con la pretensión procesal"

Por lo tanto, y conforme a lo regulado en los arts. 560, 564, 575 del Código Procesal Civil y Mercantil estamos frente a una solicitud manifiestamente improponible, por cuanto, la pretensión no puede ser jurídicamente tutelable, pues adolece de presupuestos materiales o esenciales en la pretensión, como lo es la legitimación pasiva, en consecuencia y siendo este un requisito el cual el suscrito Juez no puede suplir, se denota la falta de configuración del extremo pasivo de la pretensión, lo que deviene en el rechazo "In limine litis" de la demanda presentada, en consecuencia, **declárase improponible** la demanda interpuesta por la licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, en su carácter de apoderada general

Judicial del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, en contra del señor Osiris Luna Meza.

Tome nota la Secretaría de este tribunal de la dirección y los medios técnicos señalados para recibir notificaciones, así como las personas comisionadas para tal efecto.

NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolución al Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de su apoderada general judicial licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, en la siguiente dirección: Colonia San Antonio Abad, N° 88, Calle al Volcán, Prolongación Avenida Alberto Masferrer, San Salvador; al telefax: 2205-3800.-

23 JUN 2024



REF: 01745-20-CVEF-3CM3

E.M. (5)